



## **Ecuador en campaña perpetua**

**Milagros Aguirre A.**

**Quito, mayo de 2023**

**Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania**

Parecía estar contra las cuerdas. Meses de desgaste con su escasa popularidad, una oposición que no le daba tregua, una Asamblea (también con baja credibilidad) que solo pensaba en destituirlo, un juicio político que lo tenía arrinconado y un país agobiado por el miedo y por la violencia en las calles. Guillermo Lasso, el hombre que se había preparado durante 20 años para ser presidente del Ecuador, no ha podido gobernar. Se lo ha visto como una figura débil, pusilánime, aquejado además por problemas de salud y, principalmente, en una burbuja, sin comprender las complejidades del país diverso ni la enorme brecha económica y social existente. Incluso sus propios partidarios se han sentido defraudados: la situación del país no ha mejorado, sus ofrecimientos de campaña han caído en el vacío y ya la gente está cansada de la inseguridad que afecta en todos los niveles y a todos los estratos de la sociedad. Lasso, banquero y conservador, en lugar de parecerse más a otros mandatarios de esa línea, como Sixto Durán Ballén (1992-1996), terminó más parecido a Lenín Moreno (2017-2021).

Haciendo un balance de estos dos años, al presidente Lasso —además de la vacunación contra la Covid 19 que puso fin a la pandemia— le ha tocado tratar con temas que nunca antes se habían visto en el país, como las masacres carcelarias (11 entre 2021 y 2022) donde han perdido la vida 416 personas privadas de su libertad, de forma, además, horrenda y sanguinaria. No pudo lidiar con la oposición (correísta y no correísta) ni con la corrupción que era su bandera (se les escaparon, dejando el grillete, desde líderes de bandas criminales como Junior Roldán hasta ex funcionarios acusados de corrupción como Hernán Luque o María de los Ángeles Duarte, asilada en la embajada Argentina) ni con el descontento manifestado en las calles en junio del 2022 ni con el movimiento indígena y sus demandas ni con la alianza correísmo/socialcristianos en la Asamblea Nacional.

Al presidente Lasso, figura aparentemente conciliadora (el slogan de sus dos años de gobierno fue “Gobierno del Encuentro”) parece que le gusta apagar fuegos lanzando baldes de gasolina. Justamente en momentos en que la sociedad está crispada por la ola de violencia, los asaltos, ajuste de cuentas entre bandas y mafias, desapariciones, atracos, niños utilizados por la delincuencia organizada, muertos, maniatados, secuestros de oportunidad, extorsiones, “vacunas” (mecanismo de extorsión sobre todo a pequeños comerciantes), chalecos explosivos, son situaciones de terror, y a él se le ocurrió decretar el libre porte de armas. Nunca el país estuvo tan complicado como ahora: los delincuentes andan campantes con armas de grueso calibre y, si los detienen, son liberados a las 24 horas por la justicia. Decretar el libre porte de armas (con requisitos que parecen broma conociendo la frágil institucionalidad del país) es como echar sal sobre la herida.

La medida no hizo sino inquietar más a la población, sumirla en la incertidumbre y en el desasosiego. No se entiende cómo el gobierno se plantea frenar la violencia encendiendo otra mecha en un país donde las muertes violentas son de 25 por cada 100 mil habitantes. Instar a los ciudadanos a comprar armas para defensa personal o defensa de la familia, invitar a hacer justicia por mano propia, en circunstancias como las que vive el Ecuador de hoy no parece la mejor decisión. O quiso con ello distraer la atención del juicio político al que sería sometido o lanzó una medida desesperada porque se le fue el país de las manos.

Al día siguiente del anuncio, la gente ya quería armarse y salir a enfrentar a delincuentes o a disparar a quien parezca sospechoso. Pero además, el delicado tema abre otras puertas en otros niveles: con tasas de violencia intrafamiliar tan altas, con índices de femicidio que crecen, con estadísticas de suicidio que también crecen, el libre porte de armas no parece la mejor decisión para combatir al crimen organizado.

No fue esa la primera vez que lanzó gasolina para apagar un incendio. Cuando iniciaban las manifestaciones indígenas, en junio de 2022, la primera medida fue ordenar la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) Leonidas Iza, sin orden de un juez, con la acusación de terrorismo y luego, cuando la marcha avanzaba hacia Quito, casi a las puertas del diálogo, mandó a desalojar la Casa de la Cultura, tradicional sitio de encuentro de los indígenas en Quito. Esas dos acciones no hicieron sino crispas más los ánimos de los manifestantes. Pasados los 18 días de las manifestaciones y, cuando los llamados al diálogo para resolver 10 demandas de los movimientos sociales y organizaciones indígenas, la iglesia católica tuvo que intervenir y mediar, y se inició un interesante proceso de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, que tuvo además el apoyo técnico de la GIZ alemana, del que el gobierno pudo sacar partido. No lo hizo. Es más, no se dejó ver ni en el cierre de las mesas de diálogo (octubre 2022), un acto oficial que pudo marcar un hito para el país e incluso para la región.

Al contrario. Más gasolina. Lo siguiente fue declarar a las bandas delincuenciales como terroristas y aprobar el uso de armas letales para combatir las así como el uso de la fuerza para reprimir. Una medida que bien puede abrir puertas a la criminalización de la protesta social, a acusar como terroristas a grupos de izquierda (o de derecha, depende de la ideología de quién gobierne) o a jóvenes militantes o dirigentes de organizaciones sociales (como hicieron con el Movimiento Guevarista<sup>1</sup> ahora, o con los 10 de Luluncoto, o con los dirigentes del paro de la población de Dayuma durante el correísmo en 2007), a la represión en niveles políticos e ideológicos o a la persecución a opositores.

La posibilidad de la llamada *muerte cruzada*, es decir, la disolución de la Asamblea y la renuncia anticipada del presidente (sui generis figura que

---

<sup>1</sup> Nueve personas fueron detenidas antes del paro de junio del 2022, acusadas de tráfico de personas. Se trataba de jóvenes militantes del movimiento guevarista, un grupo de izquierda. Nueve meses después, cinco de ellas fueron puestas en libertad y declaradas inocentes. <https://inredh.org/la-jueza-ratifico-la-inocencia-a-5-integrantes-del-movimiento-guevarista-y-un-dirigente-indigena/>  
Cuatro aún permanecen detenidas.

permite la Constitución), sonaba desde hace meses como una salida a la crisis política. Se veía venir. Lasso lo hizo a pocas horas de haber asistido al juicio político convocado por la Asamblea que lo acusaba de corrupción por omisión, aunque en los altisonantes discursos previos se hablaba incluso de vínculos con la mafia albanesa y de nexos con el narcotráfico, acusación que se ha vuelto muletilla para todos los actores políticos. El gobierno acusó al movimiento indígena y a los opositores correístas, de lo mismo. ¿Se ha convertido la política ecuatoriana en una guerra de mafias?

El gobierno ha argumentado que la violencia en las calles y la guerra de bandas criminales tiene que ver con que este ha sido el gobierno que más droga ha incautado y habla de 420 toneladas en los dos años de gobierno. ¿La violencia desatada y la inseguridad es el costo que ha de pagar la ciudadanía por ello? ¿Su gobierno ha medido las consecuencias de esa estrategia? ¿Ha sido efectiva?

Lo cierto es que con el decreto 148 y la *muerte cruzada*, el gobierno de Lasso termina pateando el tablero y agitando el avispero institucional. Curiosamente, el hastío y la apatía se sienten en la calle, en la vida cotidiana: nadie ha salido a defender a ninguna de las instituciones defenestradas.

### **Candidatos y consulta popular, todo al apuro**

Apenas Lasso decretó la *muerte cruzada* empezó a moverse el tablero político. Los partidos y movimientos corrieron a buscar sus alfiles para gobernar durante año y medio, hasta el 2025 y, quien sabe, incluso para el siguiente período (2025-2029).

Al menos seis nombres aparecen como candidatos a la Presidencia de la República para terciar en las elecciones generales anticipadas convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 20 de agosto. Además del nuevo mandatario, en esa elección se debe elegir a los 137 legisladores que

completarán lo que resta del periodo 2021-2025. El Consejo Electoral aprovechará también la convocatoria para la consulta popular planteada diez años atrás por el colectivo ambientalista Yasunidos, acerca de dejar el petróleo en el subsuelo, en uno de los bloques (43) petroleros en el parque nacional Yasuní que está en plena producción desde 2016.

Fernando Villavicencio, periodista y asambleísta, abanderado de los temas anticorrupción con reiteradas denuncias, sobre todo dentro del sector petrolero desde la comisión de fiscalización de la Asamblea y antes, no demoró en anunciar su candidatura. Su férrea oposición al correísmo es una de sus cartas, aunque el respaldo al gobierno de Lasso puede ir en su contra.

Correa, desde Bélgica, jala el agua para su molino. A pesar de que en un inicio dijo que la *muerte cruzada* era inconstitucional porque no había tal conmoción social, se ha mostrado partidario de la medida como una salida a la crisis. Una posibilidad para “recuperar la patria”. A pesar de que en estas apresuradas elecciones no podrá entrar a competir —por los juicios que enfrenta— sí es posible que su partido Revolución Ciudadana/UNES abra puertas para su retorno en las elecciones de 2025. Por ahora, en las pasadas elecciones seccionales, obtuvo 48 alcaldías y nueve prefecturas, aunque, según las encuestas y los distintos analistas políticos, tiene un techo que a su candidato le resultará difícil de superar. Suenan dos nombres de su partido para estas elecciones, Andrés Arauz, que ya fue su candidato en 2020 y Carlos Rabascall. Arauz ha dicho que no quiere ser candidato, que quiere ser Presidente y que en su partido hay gente preparada para administrar el país.

Mientras lassistas y correístas no salen de sus íntimas disputas, los socialcristianos ya pusieron sobre el tablero el apoyo al “outsider”: Jan Topic, un empresario y soldado que dice haber combatido (desde la *Legión Extranjera Francesa*, según explican los socialcristianos) en Ucrania, Siria y África, que se presenta como experto en seguridad a quien el marketing político podría moldear a la manera de un “Bukele” ecuatoriano que responda a la demanda de alguien “de mano dura” para “poner orden” y “combatir a las mafias del

narcotráfico” que están tiñendo de sangre al país. El emporio de los Topic —la empresa de comunicaciones Telconet— (de propiedad de Tomislav Topic y su hijo Jan), ha sido investigado por lavado de activos y por corrupción<sup>2</sup>. El nombre de Jan Topic sonó también como posible ministro de Gobierno de Lasso luego de las elecciones seccionales (5 de febrero de este año) pero fue descartado y Henry Cevallos ocupó ese lugar.

Suenan otros nombres, como Otto Sonnenholzner, quien fuera vicepresidente del país —con Lenín Moreno—y se presenta como una alternativa “nueva”, alejada de la política tradicional. Pero en su contra tiene justamente la colaboración con el gobierno anterior en los inicios de la pandemia: fue el rostro visible del colapso de la atención sanitaria en el país y de la falta total de protocolos y preparación para atender la emergencia.

El movimiento indígena y su partido Pachakutik ponen en el tablero a Leonidas Iza, presidente de CONAIE y líder de las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022. El movimiento indígena también presenta fracturas internas. Yaku Pérez, hoy desde el movimiento Somos Agua<sup>3</sup> con el apoyo de otras organizaciones, se ha presentado como el candidato de “tercera vía”. Pérez fue prefecto del Azuay y estuvo cerca de la presidencia del Ecuador en las elecciones de 2021. Quedó en tercer lugar (aunque se habló entonces de un empate técnico con Guillermo Lasso e incluso de un posible fraude electoral), con más de un millón de votos, un hito para la participación del movimiento indígena en el proceso electoral.

Los primeros nombres —que son bastantes y pueden llegar a ser más— que han salido para ser candidatos a la nueva contienda electoral hablan de alianzas, de unidad, de necesidad de convergencias. Posiblemente este esbozo de mapa electoral cambie en esta corta campaña que requiere

---

<sup>2</sup> <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/27/nota/7158569/origen-dinero-que-llego-telconet-todavia-es-misterio/>  
<https://www.larepublica.ec/blog/2019/03/21/fiscalia-investiga-a-topic-por-presunto-lavado-de-activos-en-la-trama-odebrecht/>

<sup>3</sup> Dejó Pachakutik luego de las elecciones del 2021 tras discrepancias con la dirigencia.

definiciones inmediatas y alianzas urgentes. No hay mucho tiempo ni posibilidad de elecciones primarias transparentes ni siquiera para elaborar planes de gobierno. Y tampoco se sabe para qué. Los próximos seis meses Guillermo Lasso gobernará a medias y por decretos económicos urgentes, que deberán ser aprobados por la Corte Constitucional. El país sigue de incertidumbre en incertidumbre y, si ya se decía que estaba mal, aún puede ser peor. La única certeza es la campaña perpetua: apenas el pasado 14 de mayo se posesionaron en sus cargos alcaldes, prefectos y gobiernos seccionales, y ya tendremos elecciones para un gobierno de un año y medio de duración que volverá a llamar a elecciones. Es probable incluso que los asambleístas defenestrados con la “muerte cruzada” vuelvan a ser candidatos y ¡ganen!

### **Temas pendientes que siguen y seguirán pendientes**

Parecería que el término “democracia” es cosa del siglo pasado. La sociedad ecuatoriana, en general, pide orden para salir del caos. Ese “orden” tiene sinónimos que asustan: mano dura, autoritarismo, totalitarismo. En ese “orden” los disensos y la libertad o el respeto a quien piensa diferente, no existe. La apatía de las últimas elecciones, las cifras de ausentismo o de votos nulos, cuyas cifras han ido creciendo en las últimas elecciones, deberían hacer pensar a la clase política. ¿Qué clase de candidatos a las distintas dignidades están poniendo sobre la mesa los partidos y movimientos políticos? ¿Cómo va a recuperar la credibilidad la clase política ecuatoriana si corre a elecciones movida exclusivamente por intereses individuales y coyunturales? ¿Cómo reinventar la democracia? Y finalmente... ¿qué modelo quiere el país con tantas fracturas? ¿Hay algún proyecto de país?

Los candidatos se rasgarán las vestiduras con demagógicos llamados a la unidad, a dejar de lado las discordias para salir de la crisis, pero los temas pendientes siguen pendientes y seguirán pendientes: la inequidad, la justicia, el acceso a la salud, la calidad de la educación, la falta de empleo o de vivienda digna, además de la agenda del debate público como la transición energética,



la dependencia del extractivismo, los 248 acuerdos a los que había llegado el gobierno con el movimiento indígena y las organizaciones sociales e incluso un tema del que no se habla pero que urge que se ponga al menos sobre la mesa: la legalización de la droga en un país cuya economía parece estar sostenida, en gran parte, por esos recursos<sup>4</sup>. Todo eso queda postergado, para mañana, para después de las elecciones (2023) y para después de las futuras elecciones (¿2025?). Y, mientras tanto, como se dice popularmente, “habrá que ver qué pasa” y eso se traduce en un país paralizado en el que los ciudadanos siempre pierden (y sobreviven), un país en el que nadie tomará decisiones ni asumirá riesgos hasta ver quién es el nuevo comandante de una nave que se hunde, el “mesías” que arregle todo este caos, en el país de la retórica, de la campaña permanente, de las elecciones perpetuas.

---

<sup>4</sup> <https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/narcos-moverian-ecuador-mas-dolares-que-el-presupuesto-del-estado>